

PONIENDO TIERRA DE POR MEDIO

Migración forzada de colombianos
en Colombia, Ecuador y Canadá

Pilar Riaño y Marta Villa
(Editoras)

Ana María Jaramillo
Luz Amparo Sánchez
Martha Colorado
Patricia Díaz
Amantina Osorio

CORPORACION
REGION



The University of British Columbia

Medellín, septiembre de 2008

EDITA

Corporación Región

Calle 55 N° 41-10 Tel: (574) 216 68 22

Fax: (574) 239 55 44 Medellín, Colombia

coregion@region.org.co

www.region.org.co

Editoras

Pilar Riaño

Marta Villa

Coordinación editorial

Jorge Ignacio Sánchez.

Corporación Región

Diseño e impresión

Pregón Ltda.

Esta publicación tiene el apoyo de:
Centro Internacional de Investigación para el Desarrollo –CIID–
y Social Sciences and Humanities Research Council, Canadá –SSHRC–

CONTENIDO

INTRODUCCIÓN

Pilar Riaño-Alcalá 8

I. CONTEXTO 35

Contextos explicativos del desplazamiento interno
y del refugio de colombianos en Ecuador y Canadá
Ana María Jaramillo 37

Lo que va del desplazamiento al refugio.
Una mirada a las políticas de refugio
y desplazamiento en Colombia, Ecuador y Canadá
Marta Inés Villa 70

II TRAYECTOS Y TIPOLOGÍAS MIGRATORIAS 125

DESPLAZAMIENTO INTERNO EN COLOMBIA 127

Desplazamiento intrarregional:
entre el destierro y la inserción precaria
Ana María Jaramillo 130

El desplazamiento forzado intraurbano:
negación del derecho a la ciudad
Luz Amparo Sánchez M. 166

Las variaciones del desplazamiento interno. Una mirada comparativa de los desplazamientos intrarregional e intraurbano <i>Marta Inés Villa</i>	206
EL REFUGIO EN ECUADOR	222
Las fronteras del no reconocimiento: Los colombianos en situación de refugio en Ecuador <i>Pilar Riaño y Marta Inés Villa</i>	222
EL REFUGIO EN CANADÁ	279
De Colombia a Canadá: refugiados colombianos patrocinados por el gobierno canadiense <i>Amantina Osorio R.</i>	282
Solicitantes de refugio en Canadá: trayectos, fronteras y redes <i>Gloria Patricia Díaz Barrero</i>	321
Refugiados patrocinados por el gobierno canadiense por fuera de la frontera y solicitantes de refugio en Canadá. Una mirada comparativa <i>Pilar Riaño</i>	365
III TRAYECTOS DEL MIEDO, LAS MEMORIAS Y EL SUFRIMIENTO SOCIAL	381
Trayectos y escenarios del miedo y las memorias de las personas refugiadas y desplazadas internas <i>Pilar Riaño-Alcalá</i>	383
Sufrimiento social y salud de las personas desplazadas y refugiadas <i>Martha Colorado López</i>	419

II

TRAYECTOS Y TIPOLOGÍAS MIGRATORIAS

DESPLAZAMIENTO INTERNO EN COLOMBIA

Introducción

La migración forzada de colombianos no es un fenómeno homogéneo, por el contrario, comporta características diferenciadas según las regiones, los contextos locales, las políticas públicas y las maneras como éstas se construyen e implementan, los trayectos individuales y/o colectivos de las personas desplazadas o refugiadas, entre otros factores. Con el propósito de aportar a la comprensión de este fenómeno desde su diversidad y heterogeneidad, los dos artículos que hacen parte de esta sección analizan el desplazamiento forzado interno alrededor de dos tipologías migratorias definidas por el trayecto del desplazamiento (el espacio y camino recorrido entre el lugar de salida, los lugares de tránsito y los de llegada) y por el tipo de frontera (espacial y socio cultural) que se atraviesa: *el desplazamiento intrarregional*, en el que la gente se desplaza de una vereda a un casco urbano, pero dentro de la misma región (también llamado migración a corta distancia); y el *desplazamiento intraurbano*, en el que la gente se desplaza de un barrio o sector de la ciudad a otro.

El caso del desplazamiento intraregional, analizado por Ana María Jaramillo, es el resultado de la investigación realizada en dos regiones representativas de las dinámicas y características del desplazamiento forzado en el departamento de Antioquia y Colombia: Urabá y Oriente antioqueño. Urabá, es una de las regiones que mejor ilustra la relación

entre los factores explicativos del desplazamiento forzado con procesos históricos de conflicto de mediana y larga duración; la lucha intestina entre diversos actores armados por el control del territorio, la superposición de intereses políticos, económicos y militares como motores de las dinámicas de despojo forzado de la población. De esta región proviene la primera oleada migratoria hacia la ciudad de Medellín (1995-1998). Para el año 2007, según Acción Social, ocupa el segundo lugar como epicentro del desplazamiento forzado en el departamento de Antioquia al aportar un 26.06% del total de esta población. La región del Oriente antioqueño, por su parte, permite hacer una lectura sobre las características del conflicto en una zona, contrario a lo ocurrido con Urabá, relativamente integrada social, política y culturalmente a la región. De allí proviene la mayor parte de la población desplazada hacia Medellín desde el año 2000. Al mismo tiempo, muchos de sus municipios concentran algunas de las tasas más altas de recepción de población desplazada en el país en los últimos años. Para el año 2007, según Acción Social, ocupa el primer lugar como epicentro del desplazamiento forzado en el departamento de Antioquia al aportar un 31.07% del total de esta población

El caso del desplazamiento intraurbano, analizado por Luz Amparo Sánchez, se construyó con base en la investigación realizada en la ciudad de Medellín, una de las principales ciudades receptoras de población desplazada en el país y, desde hace algunos años, escenario también de desplazamiento dentro de la ciudad. Entre los años 2000 y 2006, de acuerdo con las cifras de Acción Social, llegaron a Medellín 16.348 hogares desplazados, equivalentes a 68.945 personas; a su vez, según la Personería, fueron expulsadas, entre 2004 y 2007, 2.690 personas. Esta doble condición de ciudad receptora y expulsora, así como las paradojas y las contradicciones que la caracterizan (como el que sea una de las ciudades en las que más se ha avanzado en la construcción de una política pública municipal para la atención y reparación de la población desplazada con un enfoque de derechos y, sin embargo, se encuentren en ella también resistencias significativas para reconocer el desplazamiento intraurbano o para llevar a cabo acciones efectivas que permitan superar la situación de exclusión y marginalidad en la que se encuentra la población desplazada) hacen de este un caso relevante

para ilustrar una de las tendencias emergentes en el desplazamiento interno en Colombia, el desplazamiento en las ciudades.

En cada uno de esos lugares, exploramos las particularidades de los contextos de expulsión y recepción, los trayectos y la organización social de la migración, las dificultades o posibilidades encontradas por la población en los procesos de reasentamiento y el significado que el miedo y la memoria tienen en la experiencia vivida por las personas desplazadas. Es allí cuando encontramos que, en el caso de Colombia, es posible leer tanto las variaciones como los impactos diferenciados de cada uno de estos factores, agrupándolos en torno a un parámetro metodológico específico, el de los trayectos y, en este caso, el de dos tipos, el intraregional y el intraurbano. Como lo demostraremos en la descripción que presentamos a continuación, la experiencia de la población desplazada, sus posibilidades de inserción a los contextos en los que se han reasentado y de restablecimiento de sus proyectos de vida, ciertamente presentan matices cuando éstas se dan en una misma región o dentro de la ciudad y en su relación con factores como la modalidad (si es desplazamiento masivo o individual), el reconocimiento institucional (si está o no incluido en el Registro Único de Población Desplazada –RUPD–, las dinámicas del conflicto y el tipo de respuesta social y gubernamental frente al fenómeno. Con estos insumos, en la tercera parte de esta sección, Marta Inés Villa presenta una lectura relacional y comparativa de estas dos tipologías, y señala, además de estos matices, las continuidades y diferencias que hay entre ellas.

Más allá de la lectura de los lugares de expulsión y recepción en los que, por lo general, se han centrado las investigaciones sobre este tema, consideramos que la incorporación de estas otras variables, poniendo al centro la experiencia de la población, permite captar la heterogeneidad de un fenómeno ciertamente complejo e interrogar, desde allí, las respuestas sociales y políticas planteadas para su tratamiento.

Desplazamiento intrarregional: entre el destierro y la inserción precaria

Ana María Jaramillo

Un rasgo característico de desplazamiento forzado en Colombia en las dos últimas décadas ha sido la configuración de epicentros de desplazamientos en directa relación con la agudización del conflicto armado. En 1995, un estudio pionero realizado por la Conferencia Episcopal (1995) identificaba la existencia de zonas críticas en varios departamentos del país. Es el caso de Urabá (Antioquia), Montes de María (Córdoba), Sierra Nevada (Magdalena), Valle del Guamuez (Putumayo), sur de Bolívar, entre otras. Una década después un balance realizado por la Conferencia Episcopal y Codhes (2006) constata la existencia de otras zonas críticas como el Oriente antioqueño, el Bajo y Medio Atrato (Chocó), varios municipios del Eje cafetero, una extensa franja de territorios cercanos a la Costa pacífica perteneciente a los departamentos de Nariño, Valle del Cauca y hacia el suroriente del país, en áreas de fumigación de cultivos de uso ilícito y de operación del Plan Patriota en los departamentos de Caquetá, Meta, Guaviare, Casanare, Vaupés, Guainía y el Amazonas.

El departamento de Antioquia se distingue por contar con dos epicentros del desplazamiento forzado: El Oriente antioqueño y Urabá. Esto explica el primer lugar de Antioquia en cuanto al volumen de población expulsada y recepcionada en el país, con un 16.05% y un 13.90% respectivamente, entre 1995 y octubre de 2007 (Gobernación de

Antioquia, 2007). A su vez, en cada una de estas regiones el desplazamiento se concentra en áreas rurales pertenecientes a municipios más directamente afectados por el conflicto armado. Según el balance antes mencionado, los municipios de Turbo y Apartadó en Urabá y Cocorná, San Luis, San Carlos y Granada en el Oriente antioqueño se encuentran entre los 40 municipios con los más elevados índices de desplazamiento en el país (Codhes, Conferencia Episcopal, 2006).

La importancia de Urabá y el Oriente antioqueño no sólo tiene que ver con la intensidad del desplazamiento sino con las características diferentes de cada región, lo cual permite entender las especificidades y particularidades del desplazamiento interno en Colombia. Urabá, como plantea García (2003, p. 2) es “una región de poblamiento reciente en la que prima su condición de frontera interior y una dinámica territorial que presiona por la articulación física y social de su territorio y la transformación de su situación de exclusión histórica a la de una región reconocida y con presencia del Estado. El Oriente antioqueño es el caso contrario: una región consolidada que jugó papel importante en la configuración histórica de Antioquia, que mantiene lazos estrechos con el área metropolitana de Medellín y que cuenta con fuerte presencia de las instituciones y con actores organizados que participan en la orientación de los destinos de su colectividad”. Además, en Urabá la violencia constituye un eje de pervivencia histórica (Uribe, 1992) mientras que, en el Oriente, si bien la violencia no ha sido un elemento ajeno a su historia reciente (la Violencia de mediados del siglo XX), no ha sido un factor determinante en la dinámica social y política, ni en la construcción de una imagen de la región como foco de desorden social y político (Roldán, 2002).

En los estudios sobre el desplazamiento en el país se ha hecho énfasis en el análisis de sus causas, intensidad, dinámicas e impactos en la población civil y en la familia (Conferencia Episcopal, 2001; López & Londoño, 2008; Palacios, 2004; Castrillón, 2005; Osorio, 2005; Salcedo, 2005; Daniels, 2005). Sin embargo, no se ha logrado ahondar en el estudio de sus variaciones de acuerdo con las particularidades de las regiones o de la experiencia de la población, tanto en los lugares de expulsión como en los lugares de recepción. Este artículo tiene el propósito de contribuir a ello, centrando la atención en una aproximación

a la experiencia de las personas que se desplazan dentro de la región, desde una perspectiva comparativa entre los dos principales epicentros de desplazamiento forzado en Antioquia y de aquellos factores que favorecen o dificultan los procesos de inserción en las sociedades receptoras.

Según Francois Dubet (1994) la experiencia es una construcción social, que remite a principios culturales y sociales heterogéneos y a una diversidad de lógicas de acción, pero también a la capacidad de los individuos para desenvolverse de acuerdo con estas lógicas de acción y tomar decisiones. En la medida que el individuo despliega unas formas de obrar, este se construye como sujeto social. Este enfoque es útil para entender la manera como la población desplazada, desde su diversidad social y cultural y en condiciones particularmente adversas, se convierte en agente social activo de su propia experiencia.

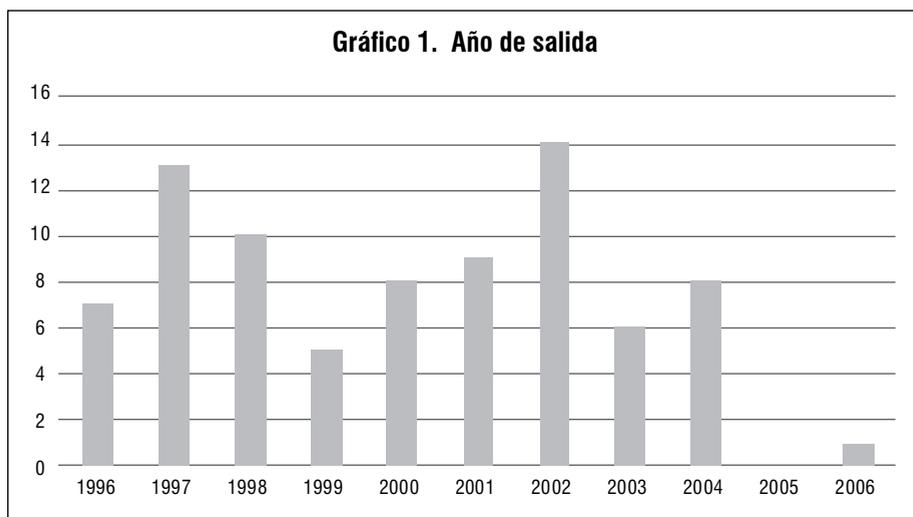
Este artículo se inicia con una presentación del perfil sociodemográfico de la población con la que se realizó la investigación en Urabá y en el Oriente antioqueño, continúa con una aproximación a diversos momentos de la experiencia del desplazamiento, teniendo en cuenta aspectos tales como motivos de salida, modalidad y trayectos, y finaliza con algunas consideraciones acerca de la experiencia de estadía en los lugares de recepción.

CARACTERÍSTICAS DE LA POBLACIÓN DESPLAZADA EN ORIENTE Y URABÁ

Las personas que participaron en la investigación en Oriente y Urabá tienen, como rasgo común, que el lugar de expulsión y el de recepción están dentro de la misma región. Además, de su experiencia pueden deducirse un conjunto de características que permiten, al mismo tiempo que identificar unos patrones comunes a esta modalidad de desplazamiento, también sus variaciones. Veamos:

Su desplazamiento se produce entre los años 1997 y 2002, el período de mayor intensidad en el desplazamiento forzado a nivel nacional.

En 1997, el desplazamiento forzado es considerado “el personaje del año” por los medios de comunicación, ante la ocurrencia de numerosos éxodos en relación con un acelerado proceso de expansión de las Autodefensas Unidas de Colombia, AUC. En este año el 40% de la



población desplazada en Colombia lo fue de la región del Urabá (Codhes, Conferencia Episcopal, 2006). En el año 2002 hay un importante incremento en los desplazamientos forzados, debido a la agudización del conflicto armado ante la ruptura definitiva en las negociaciones de paz entre las FARC y el gobierno de Andrés Pastrana. El 87% de los municipios del país, 982 de 1119, fueron escenarios de expulsión de población. Entre éstos se cuentan los municipios de Granada, San Carlos, San Luis y Cocorná, pertenecientes al Oriente antioqueño (Conferencia Episcopal, Codhes, 2006).

En Urabá, las personas contactadas se desplazan entre los años 1996 y 1998. Es el período en que los bloques Bananero y Elmer Cárdenas de las AUC despliegan una ofensiva hacia el suroccidente de Urabá y el Bajo y medio Atrato. En el Oriente antioqueño las personas se desplazan entre 1999 y el 2004. Esto se corresponde con la intensificación de la disputa entre guerrillas y paramilitares por el control de territorios en la zonas de bosques, embalses y páramo.

Proviene de áreas rurales pertenecientes a municipios epicentro de los desplazamientos forzados, a saber: Apartadó, Chigorodó, Mutatá, Riosucio, San Pedro de Urabá y Tierralta, en Urabá; y Argelia, Cocorná, San Carlos, San Luis y San Francisco en el Oriente. Su ubicación en los epicentros del conflicto armado marca la experiencia del desplazamiento, cuando su territorio se convierte en escenario donde los grupos

armados hacen un uso intensivo de estrategias de miedo y terror, por las crisis humanitarias que se generan ante la ocurrencia de éxodos, los bloqueos y confinamientos, por el declive económico de los municipios y por un empeoramiento en las condiciones de vida de la población.

El 87% se desplaza de forma familiar e individual y el 13% en desplazamientos masivos, lo cual coincide con la tendencia que se observa a nivel nacional (Comisión de seguimiento, 2008). La presencia de personas que manifiestan haber sufrido varios desplazamientos (un 29%), principalmente en Urabá, es un hecho significativo. Al respecto, la información obtenida en los talleres de memoria y las entrevistas realizadas permite identificar varias combinaciones. En algunos casos se desplazan primero de forma individual, pero, al poco tiempo de llegada a otros lugares en la misma región o en zonas cercanas, la ocurrencia de masacres o las órdenes de desalojo los obligan a desplazamientos masivos; otros han tenido que afrontar hasta dos y tres desplazamientos individuales, o un desplazamiento masivo seguido por un retorno que resulta fallido, debido a las amenazas, lo cual motiva un nuevo desplazamiento, esta vez, de forma individual. Josefina narra así su experiencia:

“Cuando estaba pequeña nos tuvimos que salir porque les decían que desocuparan las fincas. Les desocuparon, les robaron todo el ganado y todo. Nosotros vivíamos allá donde ellos, y nos tocó, pues, salir primero y ellos decían que no salían porque eso era de ellos y se iban a quedar ahí porque ¿para dónde iban a coger? Además tenían muchos niños pequeños, entonces mi mamá como era una mujer sola tenía un ranchito ahí en la finca de ellos, entonces una tía mía vivía acá y le dijo que se viniera para acá porque eso estaba muy maluco. Nosotros salimos, pero al mes les tocó salir a ellos también, y siquiera salieron porque si no los habían matado, ya nosotros habíamos salido cuando nos vinimos para el Tres, pero ahí había masacres por todas partes. Después nos vinimos para Coldesa y eso también se volvió horrible, nos vinimos para el Obrero, allí hicieron una masacre, nos fuimos para Tierralta, estábamos allá y nos tocó salir también porque eso se puso maluco, empezaron a decir que se iban a meter, nosotros salimos también”.

El que una misma persona haya sido desplazado en varias ocasiones y de diferente manera, ayuda a entender el desplazamiento no como un evento único ni rectilíneo sino como un proceso resultante de

la combinación de diversos elementos, en relación con el accionar de los grupos armados y con las circunstancias en las que se encuentran las personas y la resistencia a abandonar la región.

En cuanto a su composición social, se trata de campesinos con un predominio de pequeños propietarios, pero aquí es necesario advertir que en el Oriente esto corresponde a pequeños propietarios individuales, mientras que en Urabá la propiedad colectiva de la tierra tiene un peso importante, debido a la presencia de hombres y mujeres integrantes de comunidades afrocolombianas de Jiguamiandó y Curvaradó, procedentes del municipio de Riosucio. No obstante haber logrado el reconocimiento legal de la propiedad de sus tierras, gracias a la expedición de la ley 70 de 1993 (Ley de negritudes) y al decreto No 1745, estas comunidades han sido blanco del accionar de grupos paramilitares que llevan a cabo una labor de *limpieza* para apoderarse de sus tierras y destinarlas a la siembra y explotación de palma africana y como un corredor estratégico para el negocio del narcotráfico y el contrabando de armas.

Esto confirma el despojo de tierras al que ha estado sometida la población desde 1995, como establecen Codhes y la Conferencia Episcopal (2006) y, de manera más reciente, la Comisión de Seguimiento a la política pública de atención a la población desplazada a través de la Encuesta Nacional de Verificación —ENV—, según la cual, algo menos de la mitad de las familias eran propietarias de tierras en su lugar de origen, bien sea a través de propiedad individual (37.1%), propiedad colectiva (4.9%), o colonización (2.1%). De la población restante, el 19.1% no tenía tierra, el 7.9% correspondía a arrendatarios, el 8.2% era poseedora y el 20.8% no suministró información (Comisión de seguimiento, 2008).

El departamento de Antioquia, según un estudio realizado por la Contraloría General de la Nación ocupa el primer lugar en cuanto a hectáreas abandonadas (4.100 Km²), cifra que representa el 6.44% del total del área cultivable en el país entre los años 2001—2005, período en el cual se lleva a cabo lo que la Contraloría General de la Nación denomina una contrarreforma agraria, dado el nivel de apropiación de las mejores tierras del país por parte de narcotraficantes y paramilitares, particularmente en zonas de frontera agrícola ideales para los cultivos ilícitos, el procesamiento de drogas y la inversión en zonas ganaderas.

En Antioquia, las regiones más afectadas son: Urabá, Suroeste, Occidente, Nordeste, Oriente y el Magdalena Medio (Gobernación de Antioquia, 2006).

El cuanto a la edad, es predominante el rango entre los 35 y 45 años, seguido por población entre 46 y 55 años. Aunque se trata de una población en edad laboral, los hombres especialmente se refieren a la edad como un factor que les ha dificultado la obtención de un empleo porque, consideran, se prefiere a los jóvenes y se les subvalora en sus capacidades y en su trayectoria como personas trabajadoras y honestas.

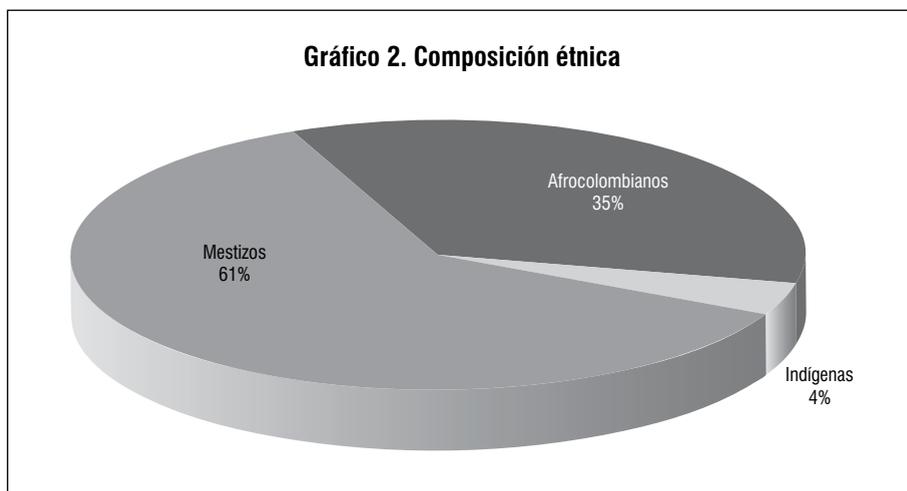
El 54% son mujeres y el 46% hombres. El predominio femenino corrobora la tendencia que se observa a nivel mundial en la composición de la población de refugiados y migrantes (Ocampo, 2006). Esta realidad, como ha señalado ACNUR (2008), tiene implicaciones en su vulnerabilidad ya que sobre las mujeres recae la responsabilidad de lidiar con amenazas personales, la estigmatización social que muchas veces acarrea la situación en la cual se encuentran, así como la de velar por la seguridad física, el bienestar y la supervivencia de sus familias.

En lo que respecta al nivel de escolaridad, el dato predominante es que el 95% no terminaron primaria, un factor que limita las posibilidades de inserción, especialmente en el medio urbano. Esto es indicativo, además, de la débil presencia del Estado en las áreas rurales y la situación de pobreza de las familias. Como lo recuerdan varias personas, no pudieron seguir en la escuela porque tenían que colaborar en los oficios domésticos y en labores del campo para ayudar a sus padres. No obstante, la educación es reconocida como un valor muy importante y como un medio para labrarse un mejor futuro.

La composición de los hogares presenta un cuadro similar al que se encontró en la Encuesta Nacional de Verificación, con una presencia importante de mujeres jefes de hogar y un promedio de tres hijos menores de edad. Según esta misma fuente, los hogares desplazados presentan un número promedio mayor que el común de los hogares, lo cual limita las posibilidades de sobrevivencia, por los recursos que demanda su sostenimiento.

En cuanto la composición étnica la presencia de personas desplazadas pertenecientes a comunidades indígenas y afrocolombianas, como se aprecia en el siguiente gráfico, corrobora la afectación de estos

sectores de población con el desplazamiento forzado, particularmente en Urabá, que concentra el 40.9% de la población afrocolombiana y un 61.5% de las comunidades indígenas del departamento de Antioquia (Gobernación de Antioquia, 2006).



En Antioquia, la población afrocolombiana desplazada representa el 74.62% y la población indígena un 18.5%. Si bien este último porcentaje es muy inferior con respecto a la población afrocolombiana, es bastante significativo, si se tiene en cuenta que es una población relativamente escasa (Gobernación de Antioquia, 2006).

Aunque los componentes étnicos y de género son reconocidos como factores de vulnerabilidad que ameritan el diseño e implementación de políticas con un enfoque diferencial, en Colombia, según el balance realizado por la Corte Constitucional, se trata más de “enunciados formales que no se traducen en criterios, instrumentos, programas especiales, recursos destinados a atender a las mujeres, los niños, los pueblos afrodescendientes e indígenas que son los más afectados por la violencia del desplazamiento forzado contribuyendo así a la reproducción del estado cosas inconstitucional” (Citado en ACNUR, 2007, pp. 241-242).

LA EXPERIENCIA DEL DESPLAZAMIENTO

La indagación sobre los motivos del desplazamiento pone en evidencia similitudes entre la población desplazada en Oriente y en Urabá

con respecto al predominio del miedo asociado a eventos específicos (asesinatos de seres queridos, enfrentamientos, masacres, amenazas) como factor determinante en el desplazamiento, y a la incertidumbre que genera el diario vivir en aquellas localidades que se convierten en epicentros del conflicto armado.

El acontecimiento que marca un punto de quiebre es la llegada del *conflicto armado de verdad* asociado, por la población, a la disputa de varios grupos armados, lo cual genera el miedo a convertirse en blanco por el mero hecho de vivir en zonas en las que era costumbre que la guerrilla hiciera presencia, o por el simple hecho de haberse visto obligado a prestarles algún servicio, por tener familiares involucrados en las filas de guerrilla o paramilitares, por las presiones de los armados, o por el miedo a ser señalado por personas con las que traían una enemistad. En estas circunstancias, la neutralidad, un comportamiento valorado como forma de protección, se hizo cada vez más difícil. Así lo explica Jacinto, desplazado de Jiguamiandó:

“Cuando el conflicto fue aumentando, la situación se tornó crítica porque el que no estaba metido estaba sujeto a recibir órdenes porque si hay una persona que esté en una vereda, por decir algo, y llegó la guerrilla y le pidió un servicio, la persona así sea o quiera ser neutral si no se lo hace de pronto pueden terminar la vida de él. Y si llegan los paramilitares también le sucede lo mismo. Y si llega el ejército le puede suceder lo mismo. Entonces ¿qué quiere decir?, que cuando uno, cuando esa persona no le sirve a cualquier actor armado es porque está confabulado con el otro”.

Aunque tener que vivir en medio de la zozobra hace pensar en la posibilidad de abandonar el lugar, se alberga la esperanza de que las cosas pudieran mejorar, pues en otros momentos, como recuerdan algunas personas desplazadas de Urabá, se tuvieron que desplazar por causa de los operativos militares, pero, cuando el ejército se marchaba, se podía retornar. El desplazamiento no se produce de inmediato sino después de un período en el cual se intenta adaptarse a una situación que empeora cada vez más.

Entre las personas desplazadas de Urabá se hace hincapié en el terror que les producía el anuncio de la llegada de los *mocha cabezas*, por las masacres que se cometían en veredas, en las fincas bananeras y en los barrios de invasión de Apartadó, o los asesinatos de hombres

que se dejaban tirados en plena calle, a la vista de todos, sin que nadie pudiera recogerlos. Así describe una mujer desplazada de Domingodó la situación que motivó su salida:

“El primer desplazamiento que yo tuve fue de Domingodó y ahí nos tocó salir todos juntos porque fueron varias chalupas, porque ahí no avisaron cuándo se iban a meter sino que fueron llegando e iban matando gente y los que pudimos salir salimos de una vez, un desplazamiento masivo los que alcanzamos a salir y el resto de gente la veíamos nosotros, cuando venía aguas abajo muerta, despedazada”.

En su estudio sobre las masacres en esta región entre los años 1991—2001, Andrés Suárez (2007) examina el porqué la apelación a esta práctica de violencia extrema. Su planteamiento es que las masacres en Urabá se insertan en un despliegue ofensivo de los actores armados (paramilitares, guerrilla de las FARC y el EPL) sobre territorialidades y poblaciones etiquetadas como zonas de influencia del enemigo y una forma comunicativa de materialización del odio extremo que está en el trasfondo de la enemistad absoluta entre los actores armados y su operacionalización a través de la interposición de la población civil (Suárez, 2007).

En sus relatos, las personas desplazadas del Oriente antioqueño se refieren al pánico provocado por el estallido de carros bomba que ocasionaron graves destrozos en las viviendas, en el comercio, los enfrentamientos entre los grupos armados, del aislamiento a que se vieron sometidos con los bloqueos (paros armados), los confinamientos y el miedo a pisar alguna de las minas antipersona sembradas por los armados. Teresa, una mujer desplazada de Cocorná, describe así la experiencia que vivió en la cabecera de este municipio:

“Esta es mi casa. Como pueden ver, acá está el comedor, esta es una de las piezas donde hacíamos los escondites, cuando nos tocó un enfrentamiento. (...) Esta es una granada que tiraron a la casa lastimosamente, pero nosotros estábamos en esos instantes orando y pues había un riel, ahí fue donde la bomba explotó pero gracias a Dios no nos hizo daño (...) Y esto acá es otra granada que explotó, este es un agente de policía que fue herido, el carro fue destruido, acá había una cantina que fue totalmente destruida, acá es un carro-bomba que explotó junto de la iglesia, en todo el sector ahí del parque, acá era donde mejor dicho había los retenes, cada que le provocaba a esa gente hacían sus

retenes acá en el Ramal. Acá era la calle por donde nosotros vivimos, estas eran las mulas que pasaban y aquí un enfrentamiento donde nosotros estábamos, mejor dicho en medio del fuego”.

Entre 2000 y 2002 en el Oriente es frecuente la apelación a los paros armados por parte de las guerrillas del ELN y de las FARC en áreas de importancia estratégica por su localización en la zona de los embalses, que proporcionan el 30% de la energía eléctrica del país, y la autopista Medellín—Bogotá. Aunque no necesariamente los paros armados equivalen a una situación de confinamiento (Consejería de proyectos, 2004) el cierre de establecimientos, las amenazas a los transportadores y las restricciones a la libre movilización de las personas derivan en situaciones de confinamiento. Ernesto, un desplazado de San Luis, manifiesta:

“A uno muchas veces le toca desplazarse del lugar de uno a otra parte, bien sea por una necesidad que tuvo de ganarse un sueldito, porque para los que trabajamos la agricultura tenemos épocas en que son difíciles de uno vivir, entonces si hay un jornalito entonces a uno le toca salir a ganárselo, y entonces ya se pusieron de que no podía uno salir y eso me pasó a mí. Yo siempre salía por ahí y me impidieron la salida al pueblo, yo les dije: Vean señores, no me hagan este mal, no es por nada, yo no estoy implicado en nada, yo necesito salir porque vea, yo tengo cuatro niños y todos son medianos y reconozcan de que yo tengo que estar saliendo al pueblo porque, bueno, uno como pobre le toca”.

También la guerrilla y los paramilitares recurren a los confinamientos como estrategia para el control de áreas de cultivo de coca o la neutralización de las acciones del ejército, en el caso de la guerrilla, o para forzar el desplazamiento de grupos de población, como ocurrió en Urabá con la ofensiva paramilitar. Entre los casos más representativos se encuentran el corregimiento de Aquitania, perteneciente al municipio de San Francisco, en el Oriente antioqueño, que presenta los más altos índices de pobreza del departamento; y, en Urabá, con las comunidades indígenas y afrocolombianas de Jiguamiandó, sometidas en el 2003 a esta situación para obligarlas a abandonar sus tierras (Consejería de proyectos, 2004).

ACNUR se refiere a la modalidad de confinamiento, como una de las caras menos visibles del conflicto armado interno que implica una

grave violación al derecho a la libre movilidad, el libre acceso a bienes indispensables para la supervivencia, la obstrucción de la posibilidad de solicitar ayuda humanitaria y la movilización para salvaguardar su vida e identidad. (ACNUR, 2007).

El entrecruzamiento entre el conflicto armado y las crisis humanitarias a causa de bloqueos, confinamientos, y éxodos y sus impactos en las economías locales y en las condiciones de vida de la población, son factores que contribuyen a hacer más borrosos los límites entre migración y migración forzada. Al respecto, Mármora (1990) hace un planteamiento que se ajusta a esta realidad, con la caracterización de un tercer tipo de migración forzada, según el cual “no existiendo condiciones (traslado compulsivo de fuerza de trabajo, en términos de redistribución obligatoria de la población con objetivos sociopolíticos) la persona debe trasladarse porque su sobrevivencia cotidiana en términos económicos ya no es posible en el lugar de origen”.

Cabe también destacar el positivo impacto que el reconocimiento de esta relación entre conflicto armado—empobrecimiento y desplazamiento ha tenido en la implementación de la política pública para la atención de población desplazada en Antioquia. En el año 2006, por ejemplo, la Gobernación introduce como criterio a tener en cuenta en la priorización de localidades afectadas por el desplazamiento, los niveles de pobreza y miseria. Entre los 40 municipios seleccionados se encuentran: Murindó, Mutatá, Turbo, San Pedro de Urabá, San Juan de Urabá y Vigía del Fuerte en Urabá y Argelia, Cocorná, Granada, Marinilla, San Carlos y San Rafael, en el Oriente Antioqueño (Gobernación de Antioquia, 2006a).

El éxodo

El abandono forzado del lugar marca el inicio de otro momento en la experiencia del desplazamiento. Aunque la incertidumbre por lo que pueda pasar continúa presente, al mismo tiempo se abriga la esperanza de encontrar refugio en otro lugar.

La modalidad del desplazamiento es un factor que condiciona el rumbo a seguir. En Colombia, para efectos de la implementación de la política pública destinada a la atención a la población desplazada, se

establece como criterio determinante el volumen de población: cuando se desplazan menos de 50 personas, 10 familias en las mismas condiciones de tiempo, modo y lugar, se habla de desplazamientos individuales o unifamiliares; y, cuando se sobrepasa esta cifra, se habla de desplazamientos masivos (Medellín, 2004).

Lo predominante entre las personas desplazadas de Oriente y Urabá es la salida de la mujer con los hijos para garantizar no ser detectados por los grupos armados ni por los vecinos y, en algunas ocasiones, la familia completa.

No en todos los casos la decisión de salir es compartida por la pareja, ya sea porque se ha producido el asesinato o desaparición del compañero o porque éste se niega a abandonar el lugar que ha sido la garantía de su sobrevivencia. Tener que asumir una separación intempestiva es motivo de sufrimiento y de incertidumbre, ante el desafío que ello representa para sobrevivir en un medio desconocido, especialmente en una cabecera municipal o un centro urbano.

En los desplazamientos masivos los factores detonantes son los enfrentamientos, las masacres y las órdenes de desalojo, que obligan a la salida de los habitantes de una determinada localidad. Por lo general, las personas desplazadas reciben ayuda humanitaria de emergencia, a diferencia de las personas que se desplazan individualmente. Si bien es cierto que la dispersión y la invisibilización en los desplazamientos individuales dificultan la atención de emergencia, ello no justifica las falencias en el diseño de un sistema de información demográfico que sea sensible a los movimientos silenciosos de múltiples familias que se desplazan individualmente (Medellín, 2004).

Los contextos locales también tienen incidencia en la oportunidad y eficacia de la atención de la población que se desplaza masivamente. En el Oriente antioqueño, por ejemplo, se logra una mejor coordinación entre las entidades internacionales, la Gobernación de Antioquia y los alcaldes. Así mismo, sectores representativos de la sociedad local en algunos de los municipios más afectados por los éxodos se movilizan para brindar ayuda al momento de su llegada a las cabeceras. En Urabá, por el contrario, las personas que hicieron parte de los éxodos coinciden en manifestar las dificultades que tuvieron que afrontar al momento de su llegada a las cabeceras, ante la actitud hostil de algu-

nos alcaldes y del Ejército, por considerarlos colaboradores de la guerrilla, los problemas de hacinamiento y las humillaciones de que fueron objeto durante su permanencia en los albergues.

Si bien los desplazamientos individuales, o “gota a gota”, son la modalidad predominante en ambas regiones, en Urabá equivale a un 80.61% y en el Oriente 61.09%. En los desplazamientos masivos, por el contrario, el Oriente presenta un porcentaje mayor, un 38.91% frente a un 19.39% (Gobernación de Antioquia, 2007). Estos contrastes guardan estrecha relación con las dinámicas y temporalidades del desplazamiento en cada región.

En Urabá, la modalidad predominante en un primer ciclo de desplazamiento (1985-1990) son los desplazamientos individuales asociados a los comienzos de la ofensiva paramilitar en el norte de Urabá. Entre 1991 y 1996 la intensificación de la disputa por el eje bananero entre las guerrillas de las FARC y los paramilitares repercute en un incremento en el volumen de población desplazada y en una combinación de desplazamientos masivos e individuales. A partir del año 2002 vuelven a tener un mayor peso los desplazamientos individuales desde veredas y corregimientos hacia las cabeceras y desde éstas hacia la ciudad de Medellín, como ha venido ocurriendo con Apartadó, el principal foco de población desplazada de Urabá hacia Medellín, según el balance realizado por la Personería de Medellín entre el 2000 y el 2005 (Personería de Medellín, 2006).

En el Oriente antioqueño, los desplazamientos individuales que se generan en la zona de embalses desde mediados de los años 90 no son visibles. Pero, al igual que en Urabá, la ofensiva lanzada a partir de 1997 por las Autodefensas Unidas de Colombia al mando de Carlos Castaño, con la realización de una serie de masacres en los municipios de San Carlos y San Rafael, seguida por las órdenes de desalojo de los habitantes de sectores aledaños a la autopista Medellín—Bogotá, por los paros armados y los confinamientos, visibilizan el desplazamiento, con la frecuente ocurrencia de éxodos masivos. Aunque a partir del 2003 hay una disminución en este tipo de acciones, los éxodos continúan de manera periódica en la zona del páramo, área de refugio de la guerrilla de las FARC y de expansión de cultivos de coca y amapola.

Los retenes

En el conflicto armado colombiano el establecimiento de retenes en áreas rurales y urbanas, se convierte en una práctica frecuente para asegurar el control de territorios y de poblaciones. De este modo se establecen unos límites que sólo pueden ser franqueados por orden de los grupos armados. En las narraciones sobre la experiencia de la salida, se revela la zozobra que se experimenta con el tránsito por lugares donde se sabe que operan este tipo de controles. Así recuerda Leticia el tránsito de Chigorodó hacia un municipio del Occidente antioqueño:

“... Vea, cuando paraba uno el bus, vea uno se salía a la carretera a parar el bus y uno pensando que ahí ya lo iban a matar. Dizque cogiendo el bus. Paraba, uno, ese bus, pero uno con ese miedito. Y uno ‘ay mi Diosito bendito’, lo que Dios quiera. Llegamos y nos montamos y uno pensando, pues, yo como no, yo no me metía con nadie, pues pa’ decir que no, que yo estaba quemada y que me iban a bajar por el camino, no. Sino que uno viajaba con ese susto. Pero uno por ahí en esos retenes siempre le daba miedo, cuando paraban esos carros y a requisar a toda la gente. A muchos los bajaban y de una vez por ahí los dejaban...”

Estos retenes no son exclusivos de lugares alejados, también fueron una práctica corriente por parte de guerrilla y paramilitares en algunos tramos de la autopista Medellín—Bogotá para proceder al asesinato de personas incluidas en listados como colaboradoras del enemigo. También se establecen en las vías de acceso a algunos municipios. Guillermo, desplazado de Granada, cuenta cómo, para salir o entrar al municipio de Granada, se tenía que cruzar tres retenes: A la salida del pueblo por parte del ejército, a la altura del corregimiento Santa Ana por la guerrilla del ELN y, a pocos kilómetros de la autopista, por los paramilitares.

Sin embargo, como analiza Pécaut (2001) los cambios en la primacía de uno u otro actor armado, en las zonas en disputa, no permite mantener por mucho tiempo el dominio territorial, lo cual hace que estas fronteras se tornen imprecisas y fluctuantes, generando con ello un aumento de la incertidumbre de la población por no saber a que atenerse y una situación de desorientación, debido a la dislocación en los referentes espaciales y territoriales.

Pero, también en el trayecto, las personas se encuentran con gentes caritativas que los ayudaron y a los cuales se hace referencia con sentimiento de gratitud. Es el caso de los choferes de buses que los transportaron sin cobrarles el pasaje, o personas que les ofrecieron algún alimento, o les proporcionaron una información sobre algún lugar donde pasar la noche, o los propietarios de algunas fincas que les permitieron ingresar a su propiedad para guarecerse de los bombardeos, como recuerdan algunas personas que hicieron parte del éxodo masivo de Riosucio hacia Pavarandó en 1997.

LAS RUTAS

Lo predominante es el desplazamiento de veredas y corregimientos hacia las respectivas cabeceras municipales. Esto ratifica la preponderancia de la corta distancia, otro rasgo característico de los desplazamientos internos tanto en Colombia como en otros países afectados, donde el desplazamiento forzado es agudo, como el norte de Uganda, Sri Lanka y Burundi (ACNUR 2006). Pero no siempre el arribo marca un punto de llegada, sino, más bien, una estación en el tránsito hacia otros lugares en la misma región o en zonas aledañas. El desplazamiento desde lugares más distantes, como es el caso de Urabá, demanda mayores preparativos en cuanto recursos y contactos para contar con algún lugar a donde llegar, aunque ha habido varias experiencias en las cuales se llega a un destino sin conocer a nadie, o donde solo se dispone de un teléfono de una persona conocida, a la cual se llama desde el Terminal para anunciar su llegada y pedirle posada por algunos días.

Las rutas por las cuales transitan coinciden con las rutas migratorias previas. En Urabá, por ejemplo, campesinos oriundos de Córdoba (llamados chilapos) forzados a abandonar sus tierras, se dirigen, al igual que anteriores generaciones de migrantes, hacia el norte de Urabá y hacia el eje bananero. Del mismo modo procede población negra oriunda del bajo y medio Atrato que se dirige a los municipios de Turbo, Chigorodó y Apartadó; y de indígenas pertenecientes a comunidades más afectadas por el conflicto armado, como los Emberá y los Cunas, que transitan por las rutas construidas por sus antepasados que, durante los siglos XVII y XVIII, ofrecieron resistencia a los procesos de ocupación y colonización por parte de los españoles, apelando a la

huida de los resguardos hacia otros territorios donde se podían invisibilizar y poner a salvo de sus perseguidores (Maya, 1998).

En el Oriente antioqueño, las personas desplazadas vuelven sobre las huellas de generaciones de migrantes procedentes del valle de Aburrá, Rionegro y Marinilla, que fueron artífices del proceso de colonización que, entre los siglos XVIII y XIX hizo, posible la fundación de buena parte de los municipios que hoy forman parte de esta región (Villegas & Aramburo, 1998), con la diferencia de que las personas desplazadas no se dirigen hacia el sur, pues ya no hay tierras para colonizar, sino hacia los principales centros urbanos del Oriente —Rionegro y Marinilla— y hacia Medellín.

La definición del lugar de llegada depende de los resultados que arroja una evaluación de factores tales como la presencia de familiares o allegados, los recursos de los cuales se dispone, y los riesgos que se corren con la cercanía o lejanía de los lugares de expulsión. Esta definición no depende tanto de la posible presencia de actores armados sino del poder contar con el apoyo de familiares y la expectativa de encontrar alguna ocupación que les permita obtener recursos para garantizar la sobrevivencia de la familia.

LA EXPERIENCIA EN UN NUEVO LUGAR

El arribo a los principales centros urbanos de la región enfrenta a las personas desplazadas a un nuevo reto, el de su permanencia e inserción en un nuevo medio social. Pero, ¿en qué medida ello representa una ruptura con la experiencia en los lugares de expulsión? ¿Qué factores han incidido en su proceso de inserción? A continuación se hará referencia a aquellos factores que, a nuestro juicio, son relevantes y en los que es posible advertir la incidencia de factores relacionados con los contextos receptores y con las estrategias que despliega la población en situación de desplazamiento.¹

Los contextos receptores

Apartadó y Rionegro son los dos centros urbanos a donde se han dirigido las personas desplazadas en las regiones del Urabá y del Orien-

1. En este apartado se hará referencia a la experiencia de personas desplazadas de Urabá y del Oriente en la ciudad de Medellín.

Aunque ambas regiones comparten la condición de ser epicentro regional del conflicto armado y el desplazamiento, se diferencian en las formas de respuesta que, desde la sociedad y desde el Estado local, se construyen para enfrentar estos fenómenos. Mientras que, por ejemplo, en Urabá los niveles de antagonismo entre los grupos armados tiene un impacto en una polarización social y política que dificulta las posibilidades de autonomía de las organizaciones sociales frente a los actores armados (como en el caso de los sindicatos bananeros y los intentos agenciados por la iglesia católica y algunos sectores sociales y políticos —Consenso de Apartadó— para el cese de la violencia y la búsqueda de salidas negociadas al conflicto) en el Oriente, por el contrario, se logra generar una mayor capacidad de respuesta del Estado, la sociedad y la Iglesia, con el impulso a diversas iniciativas de movilización (una de las expresiones más destacadas es el Movimiento Cívico de los Alcaldes con el propósito de lograr acuerdos humanitarios para ponerle freno a los desplazamientos forzados de población y el respaldo a las iniciativas de diálogo de paz con los actores armados). En el 2003 la Unión Europea selecciona a esta región como escenario de implementación del Laboratorio de Paz, lo cual genera unas condiciones favorables para el impulso a diversos procesos de organización y participación, así como a estrategias de desarrollo con alcance estratégico para el conjunto de la región.

Apartadó se caracteriza por una importante dinámica económica en relación con la industria bananera y el comercio, paralela con actividades de contrabando y narcotráfico, favorecidas por su localización estratégica, lo cual ha tenido una importante incidencia en un incremento de las muertes violentas y en la conformación de organizaciones delincuenciales. La dinámica económica de Rionegro se basa en la actividad industrial y comercial, favorecida por su cercanía a Medellín, la existencia de la autopista Medellín—Bogotá y el aeropuerto José María Córdoba.

En cuanto al desplazamiento forzado, Apartadó se consolida como un centro de expulsión y recepción de población desplazada, mientras que Rionegro es, ante todo, un centro de recepción de población que proviene de las zonas más directamente afectadas por el conflicto armado. Además, se localiza en la zona de altiplano, una de las más vigiladas por la Fuerza Pública.

La ubicación de las personas desplazadas en la periferia de estos centros urbanos tiene implicaciones distintas. Apartadó ha vivido un acelerado proceso de urbanización que dio lugar a la existencia de barrios de invasión promovidas por las guerrillas en los años 80 y, también, por políticos en espera de capitalizarlo electoralmente, urbanizadores y propietarios de tierra que han obtenido ganancias con la venta de los predios invadidos al Estado (García, 1996). La población desplazada se concentra en barrios². Este antecedente opera como un factor de discriminación contra sus habitantes, por considerarlos colaboradores de la guerrilla. En Rionegro, los procesos de urbanización no han redundado en un crecimiento desbordado de la periferia, como sucedió en Urabá. Sin embargo, la llegada de personas y familias desplazadas desde fines de los años 90, ha incidido en la emergencia de algunos asentamientos. La percepción sobre los habitantes de esta periferia está más asociada a la marginación y a la pobreza que a una estrategia de la guerrilla.

La concentración en asentamientos, como ocurre con población desplazada en las cabeceras de los municipios de Turbo, Chigorodó, Carepa y Mutatá favorece su visibilización y la atención por parte de entidades de ayuda humanitaria y del Estado, así como la construcción de redes y procesos organizativos. La dispersión, como ocurre de forma predominante entre las familias desplazadas hacia Rionegro y Marinilla, contribuye al anonimato, los invisibiliza y puede hacer más lento y difícil el establecimiento las iniciativas de organización y movilización.

El reconocimiento de su condición como personas desplazadas

El acceso al Registro Único de Población Desplazada —RUPD mecanismo administrativo definido por el Estado para la atención a la población desplazada, es, como afirma Villa (2007), un asunto nodal en el proceso de restablecimiento y realización de derechos de esta población, pues define las posibilidades de acceso a los programas gubernamentales y, de manera muy importante, las percepciones y auto-

2. De acuerdo con una encuesta realizada con las familias inscritas en el programa Familias en Acción, la población desplazada se localiza en unos 27 barrios, con una concentración en los barrios Veinte de Enero (792), Policarpa (193) y el Obrero (843) (Programa Familias en Acción. Citado en: Comité Municipal de Atención a Población Desplazada por la Violencia, 2006)

Figura 2. Asentamiento 20 de enero en Apartadó

Trabajo de campo, abril de 2006

percepciones de la población desplazada y sus posibilidades de reconocimiento e inclusión social.

Para las personas desplazadas no se trata de cumplir con un trámite burocrático; implica la toma de una decisión trascendental, pues se teme que la declaración pueda tener repercusión en nuevas amenazas y en otro desplazamiento. Sin embargo, la necesidad de obtener ayuda material se convierte en una razón lo suficientemente poderosa para intentarlo. Aunque la mayoría de las personas en el Oriente y en Urabá manifiestan haber hecho la declaración y haber sido incluidas en el RUPD, es significativo el impacto del rechazo para quienes fueron excluidas. Estas expresan su inconformidad por la injusticia que el Estado ha cometido en su contra, cuando son desplazados, como otras personas que vivieron una experiencia similar, pero, según se les dijo a algunos, se les cumplió el tiempo, haciendo referencia a la extemporaneidad de la declaración, válida cuando se presenta en un tiempo no superior a un año después de ocurrido el evento. Sin embargo, muchas personas desplazadas antes del 2000, desconocen estas disposiciones. Una mujer desplazada de Chigorodó, que llegó con sus hijos a Medellín en 1997, antes de que empezara a operar el RUPD, manifiesta:

“Yo fui a la UAO y entonces yo dije, a vea, ¿yo vengo porque yo llevo ocho años de desplazada y yo cuando eso no sabía, no me sabía mover, para hacer vueltas, pa’ recibir las ayudas y yo no he recibido ninguna ayuda, lo que hace que me desplacé’. Y lo que me contestaron fue “ah, no, es que usted lleva mucho tiempo, nosotros le estamos dando esas ayudas es a los que están fresquecitos de quince días o un año”.

Aunque la inclusión en el RUPD no es garantía para el goce de derechos, no formar parte de él cierra las posibilidades de acceso a servicios básicos. Según manifiestan algunas personas en Urabá y el Oriente, con la ayuda humanitaria recibida durante los tres primeros meses al menos se pudieron alimentar y pagar un alquiler. Pero transcurrido este tiempo, la situación se torna crítica al no haber logrado obtener un empleo que les permita la atención a las necesidades básicas de la familia sin tener que depender de estas ayudas.

La modalidad del desplazamiento incide en favor de la inclusión en el RUPD, debido a la presencia del Estado y de organismos internacionales en los lugares de recepción. En cambio, entre las personas que se han desplazado de forma individual, son menores las oportunidades para obtener información y disponer de los recursos económicos requeridos para hacer los trámites.

Estrategias de sobrevivencia

El ingreso al RUPD no es el único mecanismo al cual se recurre para que se les reconozca como personas desplazadas y sobrevivir. En Rionegro y Apartadó los hombres exploran las posibilidades de obtener un empleo en actividades similares a las que desarrollaban en el campo, por ejemplo, en calidad de jornaleros o en la agricultura; solo algunos cuantos logran ser contratados temporalmente. Por parte de aquellos que han tenido empleo transitorio se expresa un descontento por las condiciones de sobreexplotación:

“Es que los patrones se dan el lujo de pagar lo que a ellos les da la gana porque saben que hay mucha competencia de otras personas desplazadas recién llegadas”.

Lo que se impone es un continuo deambular en busca de alguna oportunidad en lo que resulte: *jornaliando* en el monte, en ventas ambulantes, mandaderos, cargando bultos en las plazas de mercado,

internándose en el monte a *yuquiar* y, en algunos casos, en calidad de *raspachines* de la hoja de coca.

Para aquellas personas que se han desplazado hacia la ciudad, la obtención de empleo se complica aun más porque se carece de los recursos y de las personas que puedan recomendarlos ante los posibles empleadores y porque el mero hecho de decir que se es desplazado genera rechazo. Esta percepción es más acentuada entre personas oriundas de Urabá que, además, son afrodescendientes y residen en Medellín. Arcesio, un desplazado de Chigorodó, líder de las organizaciones de población desplazada, hace la siguiente reflexión:

Es que en Medellín hay mucha discriminación racial y ahora más, y cuando ese mismo afrodescendiente está en condiciones económicas lamentables, más discriminación. Aunque nosotros vemos que la discriminación se da en la parte económica, acá se tiene también muy en cuenta la raza, la etnia como tal, de pronto se cree que toda la gente de Antioquia es de color blanco pero aquí en Antioquia hay negros, negros que aportan también al desarrollo social del Departamento.

En las mujeres, la lucha por la sobrevivencia ha generado cambios importantes en comparación con su vida anterior, en especial para aquellas dedicadas al hogar y que ahora no cuentan con la ayuda de su compañero. Al igual que los hombres, intentan conseguir un empleo, pero la posibilidad más cercana es el servicio doméstico, como empleadas de restaurantes, en la venta de *chance* (apuestas con la lotería) o con la venta de algunos productos elaborados por ellas (tamales, empanadas, arepas).

A diferencia de los hombres, empiezan a valorar la importancia de la educación como estrategia para mejorar sus condiciones de vida. Por esta razón, algunas toman la decisión de continuar sus estudios de primaria y realizar algunos cursos de capacitación ofrecidos por instituciones con las cuales establecen relación. Esta posibilidad es considerada como el principal logro que, pese a todo, han tenido con el desplazamiento.

“... Yo soy madre cabeza de familia de 5 hijos, yo cuando llegué desplazada apenas había hecho el 5º de primaria, hoy en día hice sistemas y terminé el bachillerato en la Universidad de Antioquia; como persona desplazada también le dan a uno oportunidades para estudiar... y mis

hijos todos están estudiando y le pido a mi Dios que me dé valor para sacarlos adelante”.

Redes y procesos organizativos

La iniciativa desplegada por las personas desplazadas en el establecimiento de relaciones con familiares, paisanos y con las instituciones, así como el impulso a procesos organizativos, se revela como un factor de peso en los procesos de desplazamiento y de inserción, así como en la construcción de una conciencia colectiva sobre sus derechos.

En la investigación se encontró que el sostén más importante está en la familia, no obstante la dispersión u el debilitamiento a consecuencia del asesinato de varios de sus integrantes. En la narración sobre los primeros meses de estadía, las personas desplazadas coinciden en manifestar que, sin el apoyo de parientes que los acogieron en sus viviendas, no les hubiera sido posible reponerse física ni emocionalmente, aunque las tensiones que genera la convivencia motivan la decisión de independizarse.

Las redes de paisanaje también inciden en los procesos de inserción. Una expresión de ello es la labor desarrollada durante algún tiempo por la colonia de San Carlos y la fundación *Granada Tierra Viva*, en Medellín, con la creación de espacios de encuentro y suministro de información a las personas desplazadas provenientes de estos municipios sobre instancias a las cuales acudir y facilitar vínculos con los lugares de procedencia, poniéndolos al tanto de los proyectos productivos desarrollados con población desplazada que ha permanecido en las cabeceras y algunas iniciativas de retorno promovidas por los alcaldes.

En Urabá el apoyo en las redes de paisanaje tiene una particular significación debido a los vínculos entre comunidades afrocolombianas, indígenas y campesinas que, tal como se anotó, cuentan con una tradición migratoria que ha favorecido la construcción de redes de apoyo.

Es común que el sostén en las redes familiares y de paisanaje se combine con la búsqueda de relaciones con funcionarios del Estado, organismos internacionales con responsabilidades en la atención a la población en situación de desplazamiento organizaciones sociales, religiosas y con jefes políticos que, en épocas electorales ofrecen, *ayudas* para la construcción de obras de infraestructura a cambio de votos.

Algo necesario a destacar es la experiencia organizativa de la población en situación de desplazamiento en Urabá: La combinación de componentes —tales como la concentración en los asentamientos, la labor de acompañamiento por parte de entidades internacionales (ACNUR, Opción Legal), una tradición de movilización social y organización de las comunidades étnicas, el campesinado y los trabajadores bananeros— ha favorecido la emergencia de diversas formas organizativas de la población desplazada. Esto se concreta en la conformación de comités en cada uno de los municipios (Turbo, Apartadó, Chigorodó, Mutatá) y una instancia de coordinación con proyección nacional (Cordeu), desde la cual se avanza en la construcción de un discurso basado en la defensa de su autonomía como desplazados, y su reconocimiento como interlocutores del Estado en la región, lo que se concreta, por ejemplo, en los aportes a la elaboración de los Planes Integrales Únicos para la atención a la población en situación de desplazamiento, PIU, en el 2006.

En el Oriente, los procesos organizativos de la población desplazada en Rionegro y en Marinilla, el segundo centro urbano de recepción, son más incipientes en comparación con Urabá, aunque se cuenta con dos asociaciones. Asociación de desplazados de Rionegro (Asoder) y la Asociación de desplazados de Marinilla (Asoderma), que han logrado avances en el desarrollo de proyectos productivos y en la interlocución con las alcaldías y con las entidades que participan en los comités municipales de atención de la población desplazada. No hay que perder de vista la ventaja que representa contar con el Laboratorio de Paz³ y la dinámica que se observa en la constitución de organizaciones de víctimas y de experiencias de elaboración colectiva de los duelos y la reconciliación entre familias y comunidades, con varios de sus integrantes vinculados a las guerrillas y a los paramilitares.

Las percepciones sobre las personas desplazadas

La presencia de población desplazada en las sociedades receptoras se constituye en un indicador sobre aquellos imaginarios que socialmente se han construido frente al otro. En relación con ello se aprecian similitudes y diferencias que se encuentran mediadas por ciertas

3. Un análisis más detallado sobre esta experiencia se encuentra en García (2007)

particularidades de las sociedades receptoras. Las apreciaciones de las personas desplazadas de Urabá y Oriente sobre la aceptación o rechazo que ha suscitado su presencia, son un elemento importante a tener en cuenta.

Una idea compartida es que se tiende a identificar al desplazado como un guerrillero. En Urabá, los desplazados mencionan las actitudes hostiles del Ejército y de algunos alcaldes, funcionarios y personas que los han responsabilizado de ser los causantes de los problemas de inseguridad. Es la experiencia de las gentes que habitan el barrio El Progreso, en Mutatá,

“donde se ha vuelto costumbre decir que la población desplazada es la que hace todo lo malo, los que roban, las prostitutas, los que fuman marihuana, los que violan”.

Esta mirada se relaciona con la imagen del *desplazado bandido* que, de acuerdo con María Teresa Uribe, evidencia la “inveterada intolerancia social construida en los marcos de una guerra de larga duración según la cual los que provienen de las zonas rojas, más que como víctimas, son mirados como parte de la guerra misma y, por lo tanto, impregnados y contaminados por ella como responsables de lo que sucede” (Uribe, 2001, p. 28).

En el Oriente no se identifica un comportamiento similar por parte de los alcaldes, sin embargo, se expresa inconformidad con el Ejército por su forma de proceder con la población y la desconfianza hacia el campesino por creer que son guerrilleros. En contraste, es significativo un sentimiento de gratitud por las ayudas que han recibido por parte de gentes caritativas: carniceros, propietarios de floristerías, legumbreserías, amas de casa, y otros que los han auxiliado con alimentos, ropa o con algún trabajito. Sin embargo, varias personas que residen en zonas de alto riesgo, comportan una visión negativa del trato que han recibido por funcionarios de la administración interesados en desalojarlos.

Este tipo de percepciones se asemejan a las que se han producido en las sociedades receptoras de países de Centroamérica afectados por el desplazamiento forzado y de migración. Es el caso de Guatemala, donde se ha podido establecer la circulación de percepciones negativas frente los migrantes y los refugiados que han retornado al país, por considerarlos como agentes invasores, responsables de un mayor

deterioro ambiental y estético y del empeoramiento de las condiciones de vida (Casasfranco, 2001). Como se concluye en este estudio, la transformación de estas miradas discriminatorias requiere políticas destinadas a crear soluciones duraderas: estrategias de desarrollo que propendan por el mejoramiento de las condiciones de vida del conjunto de la población y que involucren, en forma equitativa, a migrantes y poblaciones receptoras.

La continuidad con los miedos experimentados en los lugares de expulsión

La estadía en Rionegro y en Apartadó está marcada por una continuidad con los miedos experimentados en los lugares de expulsión, debido a la pervivencia del conflicto armado. No obstante, la localización en una u otra región marca algunas diferencias.

En Urabá la relación de continuidad con los miedos es más intensa por la existencia de territorios en disputa entre paramilitares, guerrilla y Ejército (eje Mutatá—Dabeiba y hacia el Bajo y medio Atrato). A ello se suma la presencia de desmovilizados a partir del 2005, como resultado del proceso de negociaciones de paz con las autodefensas⁴ de los que, se dice, han incurrido en las mismas prácticas utilizadas en la época de la guerra por el control de Urabá. La siguiente apreciación de una mujer que se desplazó en 1997 recoge el sentir de las personas desplazadas que residen en asentamientos de Apartadó:

“.. Ahora, luego de que estos grupos al margen de la ley se entregaron, ahora ya la cosa está como volviendo nuevamente a sentirse el mismo miedo que cuando una se desplazó, porque ya esta gente está en los asentamientos donde estamos viviendo nosotros. Esta gente anda robando, anda matando por cualquier cosa, ya uno anda con miedo, ya le da hasta miedo salir a rebuscarse a trabajar, porque la cosa está muy dura ahorita. Se está sintiendo el mismo miedo de cuando el 96, 97 que ya la gente no salía ni siquiera de su casa por temor que lo fueran a matar casi por ningún motivo”.

4. En el 2004 se produce la desmovilización de unos 447 integrantes del Bloque Bananero; en el 2005, 465 integrantes del Frente Héroes de Tolová, 309 del Frente Costanero del Bloque Élmer Cárdenas y 358 del Bloque Pacífico (Héroes del Chocó), y en el segundo semestre del 2006, 484 del Bloque Élmer Cárdenas (segunda fase) (Gobernación de Antioquia, 2006: 44).

Según informe del Observatorio de Derechos Humanos de la Presidencia de la República (Gobernación de Antioquia, 2006) luego de la desmovilización del Bloque Bananero, en todos los municipios, a excepción de Arboletes, se presenta un incremento en el número de desplazados. Los aumentos más notables se dan en Apartadó con el 117%, Turbo con 77%, San Pedro de Urabá con 72%, Necoclí con 55% y Mutatá con el 45%.

La persistencia de una situación que, como estas, genera inseguridad y riegos para la población, no es exclusiva de Urabá. También en Medellín las personas en situación de desplazamiento que residen en los asentamientos, en particular aquellos que han sido señalados como base de apoyo de la guerrilla, manifiestan haber vivido una situación similar o peor que en los lugares de expulsión. Esto es lo que cuenta una mujer desplazada de Chigorodó en 1997, residente en el asentamiento El Pinal, en la zona nororiental de la ciudad:

“La gente extraña tampoco podía ingresar al barrio, los esposos de uno salían y uno no sabía si regresarían. Entonces era una zozobra muy impresionante, los cogían a ellos borrachitos ahí y les daban. Entonces la gente comentaba: “Se va a meter la guerrilla o se van a meter los paracos y van a barrer”, ahí no tienen que ver si son inocentes o no, ahí le van a dar es por parejo. Y una era esperando que llegara la noche y sin saber en que momento le iban a llegar a tocar la puerta. Dentraban vestidos de soldados y uno no sabía si era el Ejército o era quién, entonces era una zozobra muy impresionante. Yo digo: la peor historia que he vivido fue en El Pinal... fue en El Pinal; la gente se encerraba a las seis de la tarde”.

En Rionegro y en Marinilla la sensación es de mayor tranquilidad pues allí no se presentan este tipo de enfrentamientos. La gente recalca el hecho de poder dormir tranquilos y no estar sometidos a la zozobra de una toma, o un enfrentamiento, o de que “ya casi llegaban por uno”, aunque se sabe que los grupos armados están ahí y que las cosas se siguen complicando en los municipios de donde fueron expulsados. Pero, al igual que las personas desplazadas de Urabá, la presencia de desmovilizados y las amenazas contra algunas personas desplazadas que han presentado denuncias contra los jefes paramilitares en el marco de la Ley de Justicia y Paz, ha vuelto a revivir el miedo a ser perseguidos y a protagonizar un nuevo desplazamiento.

La memoria de las pérdidas

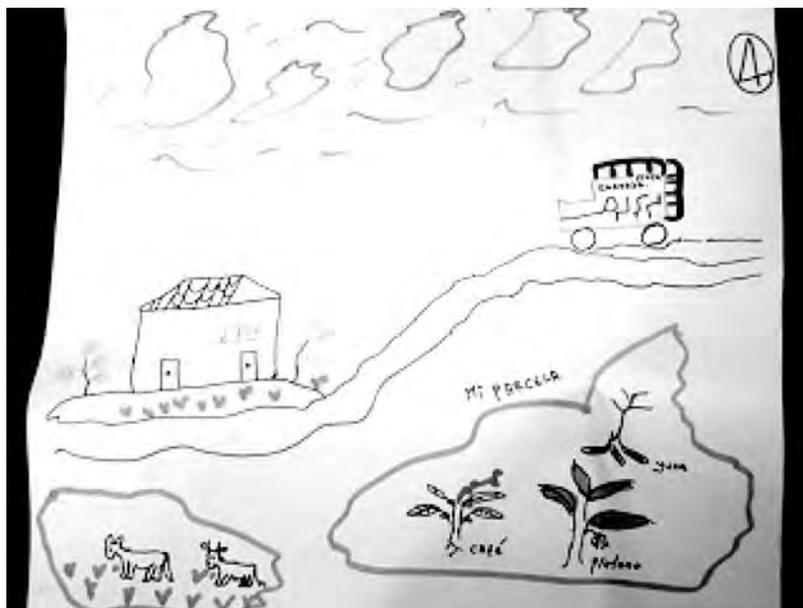
Las descripciones realizadas en talleres y entrevistas por las personas desplazadas en Oriente y Urabá coinciden en el establecimiento de una radical diferencia entre un antes y un después, lo que permite entender el sentido que se le asigna a las pérdidas sufridas. Estas no se remiten solamente a los bienes materiales —tierra, vivienda, animales domésticos, cultivos—; remiten, también, a una forma de vida en la cual las relaciones de amistad basadas en la cooperación y la construcción de obras de beneficio común contribuyen al afianzamiento de un sentido de comunidad y de pertenencia a la región. Una mujer desplazada de Granada lo explica del siguiente modo:

“Y mire que en las veredas donde nosotros estábamos ubicados eran muy organizados a nivel comunitario, que eso es lo que duele, o sea no tanto como la pérdida ya económica, sino la pérdida de seres queridos, la pérdida de pronto de integración social, porque allá todos éramos solidarios, compartidos, que el uno sacaba una cosecha de tomate, el otro de fríjol, “venga, yo le doy tomate y usted me da fríjol”. En la finca a nosotros nos sobraba la comida para vender y para repartir por toda la comunidad. Allá todas las veredas han sido muy bien organizadas, Juntas de Acciones Comunales, en la cuestión católica, en todo, capillas, iban padres a celebrar misa cada ocho días, en las escuelas eso era que uno enviar los niños a la escuela era como enviárselos a unos segundos padres, los profesores”.

En su reflexión sobre las personas desplazadas en Colombia, Daniel Pécaut retoma la tesis de Hannah Arendt acerca de la experiencia de los apátridas en el período de entreguerras, según la cual la pérdida de su residencia no sólo equivale a una pérdida de propiedades, sino de todos los elementos que los enmarcan en una tradición que es parte de su individualidad, es “la pérdida de toda la trama social en la cual se ha nacido, y en la cual se ha organizado un espacio particular en el mundo” (Arendt, citada en Pécaut, 2001, p. 261).

Lo que, además, resulta significativo es como esta vuelta al pasado no se traduce en una actitud de parálisis sino, más bien, en una mirada hacia el futuro, motivada por el deseo de sacar adelante a sus hijos, y en un sentido de dignidad que los impulsa a valerse por sus propios medios y a no tener que vivir dependiendo de los demás.

Figura 3. “Mi parcela”



Dibujo realizado en taller de memoria con mujeres desplazadas del oriente antioqueño

Las mujeres son quienes comportan esta mirada más esperanzadora frente al futuro, en lo cual incide una valoración positiva de las oportunidades que para ellas se han abierto con el desplazamiento. A los hombres les ha resultado más difícil elaborar las pérdidas sufridas por la imposibilidad de continuar ejerciendo su papel como jefes del hogar y por la forma como, consideran, se les ha subvalorado por parte de instituciones que no los tienen en cuenta.

La construcción de futuro no contempla el retorno. La actitud predominante es una negativa a volver al lugar de origen, ante el temor a una repetición de la experiencia vivida con el desplazamiento forzado debido a la continuidad del conflicto armado, la desconfianza en el Ejército, las ofertas del Estado que, consideran, no representan una garantía para el restablecimiento, ya que se limitan a otorgar algunas *ayudas* por tiempo limitado, sin tener en cuenta los gastos necesarios para la reconstrucción de sus viviendas y la devolución de las tierras, cuestión en la que sí insisten las personas desplazadas de las comunidades afrocolombianas de Jiguamiandó y Curvaradó.

Entre las razones para no retornar se observa una coincidencia con los resultados de la ENV (Encuesta Nacional de Verificación), según los cuales el 69.2% lo descarta por la creencia sobre la persistencia de las causas del desplazamiento en sus lugares de origen; en un 16.4%, por la estabilización económica alcanzada; en un 6.3%, por las condiciones de vida existentes en el lugar de origen; en un 2.2%, por la ausencia de un lugar al cual llegar; y en un 2.3%, por la falta de oportunidades de empleo.

Aquellas personas amenazadas de forma directa o que tienen familiares vinculados a los grupos armados, descartan cualquier posibilidad de retorno, dada la permanencia del conflicto armado. Esto acentúa su vulnerabilidad, pues es una alternativa que no puede ser considerada al momento de afrontar una situación de riesgo en los lugares donde se encuentran.

La opción del retorno se torna más lejana, en la medida que transcurre el tiempo y se cuenta con un rancho en el asentamiento o con la expectativa de obtener crédito para vivienda, y cuando han transcurrido varios años en los cuales se ha logrado sobrevivir y se cuenta con acceso a servicios de salud y educación. Aunque sea en niveles mínimos, esto es valorado como el resultado de una lucha por su inclusión en el RUPD y su empeño en salir adelante.

Sin embargo, han tenido lugar algunas experiencias de retorno. En el Oriente, por ejemplo, algunas iniciativas de este tipo han sido lideradas por los alcaldes y por las colonias, como en los municipios de Cocorná y San Carlos. En Urabá, algunas comunidades, como Saiza, han contado con el acompañamiento de ACNUR y el apoyo de entidades de ayuda humanitaria. Pero las fallas en la implementación de las políticas de restablecimiento y las amenazas que se ciernen sobre la población con el accionar de grupos armados ilegales, sumados los operativos militares, son motivo de incertidumbre para las personas que han vuelto sobre sus huellas.

CONCLUSIONES

La indagación realizada sobre el desplazamiento intrarregional, con énfasis en aquellos factores que favorecen o limitan el proceso de inserción en la sociedad receptora, permite establecer lo siguiente:

Las dinámicas del desplazamiento en las regiones estudiadas confirman la tendencia que, desde mediados de la década de 1980, dan cuenta de las especificidades de este fenómeno en Colombia: su prolongación en el tiempo; la progresiva expansión (desde las veredas más alejadas hasta centros del poder económico y político); la combinación de desplazamientos individuales con éxodos que ponen en marcha a grupos de población campesina, indígena y negra; y la relación con la disputa por el control de territorios de valor estratégico.

La modalidad del desplazamiento, es un factor que condiciona los procesos de restablecimiento: en los desplazamientos individuales unifamiliares (la variante examinada) la invisibilización y la dispersión dificultan la recepción de ayuda humanitaria de emergencia y las acciones reivindicativas colectivas.

Por lo general, quienes han hecho parte de los éxodos se localizan en asentamientos en la periferia de las cabeceras municipales, especialmente en los centros urbanos de mayor desarrollo. Esto facilita la atención y la vinculación a procesos organizativos, aunque también representa mayores riesgos para la seguridad por la presencia allí de actores amados o de miradas discriminatorias o estigmatizantes sobre los lugares y sobre la población.

La temporalidad sobresale como otro factor que condiciona el restablecimiento. Para quienes se desplazaron antes de 1997, se conjugan varias vulnerabilidades que tienen que ver con su no inclusión en el RUPD, por la invisibilización del fenómeno del desplazamiento forzado en el país, y por la debilidad, en ese período, de prácticas institucionales, gubernamentales y no gubernamentales, que acompañaran estos procesos de búsqueda de reconocimiento, como sucede hoy en día.

Particular importancia reviste la permanencia en la región en los procesos de restablecimiento por varias razones: los trayectos cortos demandan menos recursos y planificación que cuando se trata de trayectos largos (Urabá—Medellín); la cercanía social y cultural facilita el aprovechamiento de saberes adquiridos en las labores del campo y el apoyo en redes familiares; además, la cercanía a los lugares de expulsión, contribuye a aminorar el desarraigo y las posibilidades de retorno.

Sin embargo la comparación entre la experiencia del desplazamiento forzado en Urabá y el Oriente antioqueño pone en evidencia

ciertas características de cada región que condicionan los alcances de los procesos de inserción. En Urabá, la continuidad del conflicto armado, el accionar de grupos ilegales, la mirada que desde sectores de la sociedad y del Estado se comporta frente a la población desplazada y el debilitamiento del tejido social, dificultan en mayor medida que en el Oriente los procesos de inserción.

Tampoco se trata de realidades inamovibles. Como suele acontecer en Colombia, los cambios en la dinámica del conflicto armado, los avances o retrocesos en el campo de las políticas públicas, en la prioridad que por parte de las administraciones locales y departamentales se le asigne a la problemática del desplazamiento, la capacidad de organización y de movilización de la población en defensa de sus derechos, y los cambios en las percepciones que socialmente se construyen frente al desplazamiento y a la condición del desplazado, pueden introducir variaciones en los contextos regionales y en las posibilidades de restablecimiento, acordes con un enfoque de derechos.

Los elementos de comparación entre personas desplazadas que permanecen en la regiones y quienes se establecen en la ciudad evidencian importantes similitudes pero, también, algunas diferencias significativas. A las dificultades asociadas a la experiencia del desplazamiento, se suman las que se derivan de afrontar recorridos más largos, la construcción de redes de apoyo en un entorno social y cultural desconocido, los esfuerzos que demanda el conocimiento de la ciudad y la apropiación de códigos urbanos. En particular, para las personas oriundas de Urabá la situación es más desfavorable que para las del Oriente por el peso de ciertas actitudes y prácticas discriminatorias frente a los negros oriundos de Urabá.

Más que la atención recibida por parte del Estado, es la capacidad desplegada por parte de las personas desplazadas en Oriente, Urabá y en Medellín (para sortear dificultades tanto en el desplazamiento como durante su estadía en las sociedades receptoras, con la construcción de redes de apoyo y el impulso a procesos organizativos) lo que, en buena medida, ha hecho posible su permanencia y el logro de avances en su de constitución como actores sociales y políticos.

Este análisis permite apreciar la incidencia de cada uno de los elementos considerados como relevantes; se ha puesto en evidencia la

incidencia relativa de cada uno de ellos y, sobre todo, la manera como las interrelaciones entre unos y otros pueden favorecer o entorpecer los procesos de restablecimiento y, en últimas, la posibilidad o no de franquear los límites entre la exclusión y la inclusión de las personas en situación de desplazamiento como ciudadanos y ciudadanas con plenos derechos.

Referencias

- Acción Social. (2007). *Acumulado entre 1995 y 15 de octubre de 2007*. En: www.accion-social.org.co. Consulta: octubre 30 de 2007.
- Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados ACNUR. (2006). *La situación de los refugiados en el mundo*. En: www.acnur.org.co. Consulta: julio 10 de 2008.
- Agencia de las Naciones Unidas para los refugiados ACNUR. (2007). *Balance de la política pública para la atención integral al desplazamiento forzado en Colombia. Enero de 2004 a abril de 2007*. En: <http://www.acnur.org>. Consulta: julio 10 de 2008.
- Casasfranco Roldán, M. V. (2001). *Las migraciones y los desplazamientos forzados: Análisis comparativo integral desde un enfoque de derechos humanos (retos en Centroamérica y Colombia)*. San José de Costa Rica.: Fundación Arias para la paz y el progreso humano, Centro de investigaciones para el desarrollo (IDRC) Canadá y Centro de Naciones Unidas para el desarrollo.
- Castrillón, P., Palacio, M. C. (2005). Conflicto armado y desplazamiento forzado en el eje cafetero En: *El desplazamiento en Colombia: Regiones, ciudades y políticas públicas*. M. N. Bello y M. I. Villa, (Eds.) Medellín: Corporación Región, pp. 23-39.
- Comisión de Seguimiento a la Política Pública Sobre el Desplazamiento Forzado. (2008). *Proceso nacional de verificación de los derechos de la población desplazada. IV Informe a la Corte Constitucional* (Versión electrónica). Bogotá.
- Comité Municipal de Atención Integral a la Población desplazada por la violencia. (2006). *Plan Integral Único (PIU)* (Versión electrónica). Apartadó.
- Conferencia Episcopal de Colombia, Consultoría para los derechos humanos y el desplazamiento (2006). *Desafíos para construir nación. El país ante el desplazamiento, el conflicto armado y la crisis humanitaria 1995-2005*. Bogotá: Codhes.
- Conferencia Episcopal de Colombia. (1995). *Derechos humanos: Desplazamiento por la violencia en Colombia*. Bogotá: Conferencia Episcopal.
- Conferencia Episcopal de Colombia. (2001). *Desplazamiento forzado en Antioquia 1985-1998*, No.9. Bogotá: Conferencia Episcopal.
- Daniels, A. (2005). El conflicto armado y el desplazamiento en Bolívar: de la formalidad legal a la justicia real. En: *El desplazamiento en Colombia: Regiones, ciudades y políticas públicas*. M. N. Bello y M. I. Villa, (Eds.). Medellín: Corporación Región, pp. 203-233.
- Defensoría del Pueblo. (2004). *Políticas públicas y desplazamiento: Una reflexión desde la experiencia*. Bogotá: Defensoría del Pueblo.
- Dubet, F. (1994). *Sociologie de l'expérience*. Paris: Seuil.

- García, C. I. (1996). *Urabá Región, actores y conflicto, 1960-1990*. Bogotá: CEREC, Instituto de Estudios Regionales INER.
- García, C. I. (2007). *Conflicto, discursos y configuración regional. El Oriente antioqueño de la violencia de los cincuenta al Laboratorio de Paz*. Medellín: Instituto de Estudios Regionales INER.
- Gobernación de Antioquia (2006a). *Propuestas de Municipios a priorizar para la atención a la población desplazada por la Violencia* (Versión electrónica). Medellín.
- Gobernación de Antioquia (2007). *Situación actual del desplazamiento forzado en el departamento de Antioquia* (Versión electrónica). Medellín.
- Gobernación de Antioquia-DAPARD- Comité Departamental de atención a la población desplazada. (2006). *Plan integral único de atención a la población afectada por el desplazamiento forzado por la violencia en Antioquia -PIU-* (Versión electrónica). Medellín.
- Mármora, L. (1990). Derechos Humanos y políticas migratorias. *Revista de la OIM sobre Migraciones en América Latina*, vol. 8, núm. 2- 3, CIMAL-OIM, Santiago de Chile, agosto-diciembre, 1990, 7-32.
- Maya, M. (1998). *Fronteras socioculturales territorialidades débiles y región. El caso de Urabá*, Tesis de Maestría en Ciencias Sociales, Medellín: Universidad de Antioquia.
- Medellín, F. (2004) Políticas públicas y desplazamiento forzado. En: *Políticas públicas y desplazamiento: Una reflexión desde la experiencia*. Bogotá: Defensoría del Pueblo.
- Osorio, F. E. (2005). Notas para un balance de las dinámicas de guerra y el desplazamiento en la región central. En: *El desplazamiento en Colombia: Regiones, ciudades y políticas públicas*. M. N. Bello, y M. I. Villa, (Eds). Medellín: Corporación Región, pp. 101-125.
- Pécaut, D. (2001). A propósito de los desplazados en Colombia. En: D. Pécaut, *Guerra contra la sociedad*. Bogotá: Planeta.
- Personería de Medellín (2006). *Informe* (Versión electrónica). Medellín: Personería de Medellín.
- Roldán, M. (2002). *A sangre y fuego. La violencia en Antioquia, Colombia 1946-1953*. Bogotá: Instituto Colombiano de Antropología e Historia; Fundación de Promoción de la Ciencia y la Tecnología.
- Salcedo, J. A. (2005). La dinámica del desplazamiento en la ciudad región de Calisuroccidente colombiano. En: *El desplazamiento en Colombia: Regiones, ciudades y políticas públicas*. Bello, M. N. y Villa, M. I. (Eds). Medellín, pp 301-317.
- Suárez, A. F. (2007). *Identidades políticas y exterminio recíproco. Masacres y guerra en Urabá, 1991-2001*. Bogotá: Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales IEPRI.
- Uribe, M. T. (1992). *Urabá, ¿región o territorio? Un análisis en el contexto de la política, la historia y la etnicidad*. Medellín: Corpourabá, Instituto de Estudios Regionales.
- Uribe, M. T. (2001). Aproximaciones teóricas y metodológicas. En: Conferencia Episcopal de Colombia. *Desplazamiento forzado en Antioquia, 1985-1998*, No 0. Bogotá: Conferencia Episcopal.
- Villa, M. I. (2007). Representaciones sociales y políticas públicas, la mirada de los servidores públicos. En: En: M. Villa, A. Jaramillo y A. Sánchez, *Migración*

- Forzada de Colombianos, Colombia*. Medellín: Corporación Región, University of British Columbia y FLACSO, Ecuador, pp. 171-183.
- Villegas, L., Aramburo, C. (1998). *Paisas más allá. Desplazamiento y repoblamiento del noroccidente*. En: *Colombia país de regiones*, vol I. Bogotá: Cinep.